

Informalidad e Inclusión Social en Tiempos de COVID-19

Sesión 3:

DIÁLOGO SOCIAL INCLUSIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL Y LA IDENTIFICACIÓN CON LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Los ciudadanos de América Latina y el Caribe buscan nuevas maneras de influir en las decisiones de políticas públicas más allá de las elecciones. Para responder a estas demandas y afrontar la recuperación posterior al COVID-19, las autoridades de la región deberán adoptar una cultura de apertura que integre a sus ciudadanos y actores en procesos clave de toma de decisiones.

En las últimas dos décadas, los ciudadanos de la región han exigido cada vez más una mayor transparencia y rendición de cuentas a sus gobiernos y han buscado oportunidades para participar más activamente en conformar las políticas que afectan su vida (OECD, Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, 2009). Los gobiernos empiezan a percatarse de que por sí solos no pueden lidiar con retos de política mundiales y nacionales complejos como el COVID-19, el combate al cambio climático, la escalada de los niveles de obesidad y el fomento de la igualdad de género.

En particular, la respuesta a la crisis del COVID-19 requerirá por lo menos tres etapas de acción coordinada de los gobiernos: una reacción inmediata a la emergencia, un periodo de reevaluación y un plan de recuperación a largo plazo. Los principios de la OCDE de gobierno abierto —transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana— deberán dirigir la atención pública a lo largo de las tres etapas. En el corto plazo, se requiere comunicación pública y transparencia para reforzar el cumplimiento de las medidas de emergencia y combatir la desinformación. En el mediano plazo, para responder a las crecientes demandas de políticas y servicios públicos de mejor calidad, es necesario que los gobiernos trabajen con los ciudadanos y otros actores para encontrar soluciones que correspondan a sus necesidades. La participación incluyente es fundamental para crear una sociedad sostenible y socialmente solidaria (OECD, Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World, 2011), una que “trabaje para conseguir el bienestar de todos sus miembros, que combata la exclusión y la marginalización, que cree un sentido de pertenencia, que promueva la confianza y ofrezca a sus miembros la oportunidad de tener una movilidad social ascendente” (OECD, Social Cohesion, n.d).

Todos los países de América Latina y el Caribe tienen agendas de gobierno abierto en vigor. Los países deberían centrarse en potenciar el impacto de las reformas para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la participación de los actores a medida que buscan soluciones para gestionar las repercusiones del COVID-19.

El surgimiento del movimiento mundial de gobierno abierto, que la OCDE ha abanderado, ha intervenido de manera importante en colocar la participación de ciudadanos y actores de vuelta en la agenda de muchos países, incluso en América Latina y el Caribe, donde 16 países son hoy miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Las reformas de gobierno abierto se construyen a partir de la idea de que promover la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación de ciudadanos y actores permite a los gobiernos trabajar mejor, prestar los servicios que sus electores desean y necesitan y, en última instancia, aumenta la confianza en la legitimidad de sus decisiones. Esto será relevante en particular porque, incluso antes de que el COVID-19 azotara la región, cerca de 64% de los latinoamericanos informaron que no tenían confianza en sus gobiernos nacionales.¹ Una falta general de confianza podría debilitar la capacidad de las autoridades de asegurar la aceptación y el cumplimiento de las medidas de confinamiento, por ejemplo, lo cual dificultaría aún más el control del virus.

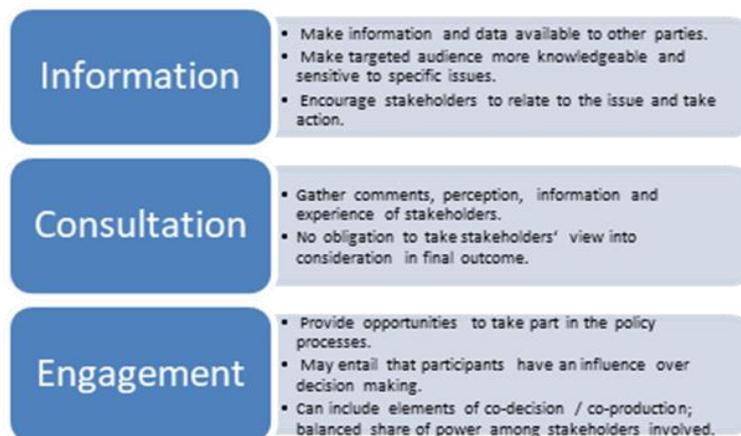
¹ OECD et al. 2019 >>

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre gobierno abierto (OECD, Recommendation of the Council on Open Government, 2017) es el primero y el único instrumento legal internacional sobre el tema. Los tres miembros Latinoamericanos de la OCDE (México, Chile y Colombia), así como Costa Rica (país invitado a ser miembro) se han adherido a este instrumento. La Recomendación invita a los gobiernos a implementar y fomentar maneras innovadoras de participación de ciudadanos y actores con oportunidades iguales y justas de intervenir en todas las etapas del ciclo de política y el diseño y la prestación de servicios.

La participación de ciudadanos y actores no es una herramienta de política universal. Es preciso que las autoridades públicas garanticen el impacto, la inclusión y la representatividad para explotar los beneficios de cada proceso participativo.

La OCDE identificó cuatro tipos diferentes de relaciones entre ciudadanos y gobiernos (OECD, 2001). Dichas relaciones varían desde el suministro básico de información, que es la forma más débil de participación, hasta formas de participación plena como la coproducción, la coejecución y la coevaluación, lo que implica una proporción equilibrada de fuerzas entre los actores (OECD, 2016). Cada una tiene diferentes objetivos e impactos:

Gráfica 1. La escala imaginaria de prácticas de participación: niveles de participación de los actores



Fuente: Adaptado de OECD (2015a), "Policy shaping and policy making: The governance of inclusive growth", informe de antecedentes a la Reunión Ministerial de Gobernanza Pública, 28 de octubre, www.oecd.org/governance/ministerial/the-governance-of-inclusive-growth.pdf

Para que la participación sea incluyente y atienda efectivamente las necesidades de todos los ciudadanos y actores, es necesario asegurarse de incluir a "la mayoría silenciosa" y a grupos tradicionalmente excluidos, como los trabajadores informales (que representan más de la mitad del empleo de la región²), las mujeres, las poblaciones indígenas, la población LGBT y otros (OECD, Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World, 2011) que son particularmente vulnerables a la crisis en curso (Sesión 2). Para ayudar a las autoridades públicas a superar los retos de la participación efectiva de ciudadanos y actores, la OCDE estableció [10 principios rectores para una formulación de políticas abierta e incluyente](#), que abarcan el compromiso político, los derechos ciudadanos, la claridad, la rendición de cuentas y la evaluación de los procesos como directriz para que los gobiernos implementen mejor los mecanismos participativos (OECD, 2016).

La OCDE ha trabajado ampliamente con los países de la región en la promoción de los principios de gobierno abierto. El trabajo incluye Estudios de Gobierno Abierto en [Costa Rica](#) y [Argentina](#), y asesoramiento sobre participación ciudadana en el proceso constitucional de Chile. También trabajó con Colombia, Perú, México, Brasil, República Dominicana, Guatemala y muchos otros para impulsar sus agendas de gobierno abierto. La [Red de la OCDE sobre](#)

² Formalization Policies in Latin America, Presentación por J. Chacaltana, ILO, 2019 >>

[gobierno abierto e innovador en América Latina y el Caribe](#) proporciona además una plataforma para que los países de toda la región debatan sobre reformas de gobierno abierto y experiencias participativas y podría utilizarse para analizar los retos de la crisis en curso. La evidencia muestra que los países de América Latina y el Caribe comparten retos similares relativos al gobierno abierto: cooperación entre instituciones, falta de estrategias exhaustivas, necesidad de marcos institucionales más fuertes e institucionalización, entre otros (OECD, Open Government in Latin America, 2014) (Ramirez-Alujas & Dassen, 2016). Dado el carácter de la crisis actual, hay retos que, de no atenderse adecuadamente, podrían dificultar a las autoridades la resolución de las consecuencias.

Entender cómo se diseñan las políticas puede reforzar la gobernanza pública y fomentar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Las prácticas participativas pueden promover una formulación de políticas eficiente, incluyente y confiable en la región.

El proceso de formulación de políticas es tan importante como las propias políticas para construir la cohesión social por razones tanto de eficacia como de equidad, ya que incluye las opiniones de todos los actores, desde aquellos que pondrán en marcha las políticas hasta los beneficiarios finales (OECD, Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World, 2011). La experiencia de los países miembros de la OCDE indica que la participación puede mejorar el desempeño de las políticas y la calidad de los servicios públicos, al ayudar a los gobiernos a comprender mejor las necesidades de las personas, aprovechar la inteligencia colectiva para la innovación, crear políticas más costo-eficientes y optimizar la implementación de políticas (OECD, Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, 2009). Además, la participación en el ciclo de política puede promover la confianza en la toma de decisiones pública y, por consiguiente, en el cumplimiento y un desempeño democrático más fuerte; responder a las inquietudes de los públicos subrepresentados al abordar la desigualdad de voz y acceso y así combatir la exclusión y la marginación, y crear un sentido de pertenencia y, por ende, fomentar la cohesión social. Esto es particularmente importante para la región, si se considera que incluso antes de la llegada del COVID-19, tres de cuatro latinoamericanos decían tener poca a ninguna confianza en sus gobiernos nacionales³. Más aún, en plena crisis sanitaria solo 49% de los ciudadanos dijeron estar satisfechos con la calidad de la atención de la salud en 2018 y un asombroso 34% dijo estar satisfecho con el aspecto judicial. Mayores niveles de confianza en el gobierno, una buena gobernanza y servicios públicos eficientes y equitativos son algunos de los resultados que pueden obtenerse al emprender reformas de gobierno abierto (OECD, 2016[6]).

La transparencia y el acceso a la información son prerequisites de una participación eficaz a lo largo del ciclo de política.

La disponibilidad de los derechos constitucionales y las leyes sobre acceso a la información (AAI) y transparencia están cerca de ser normalizados en los distintos países (OECD, Open Government in Latin America, 2014); (UNESCO, n.d). Algunos, trabajan en la creación de marcos de AAI incluyentes, como Guatemala, donde la ley está disponible en 20 diferentes lenguas indígenas (OECD, Open Government in Latin America, 2014). Además de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas pública, el AAI puede igualar las condiciones para una participación incluyente al empoderar a grupos marginados con información (United Nations, Information for Integrated Decision-Making and Participation, n.d).

Países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay, están presentando información del sector público en un formato de datos abiertos en un portal centralizado que brinda oportunidades importantes de crecimiento económico, servicios públicos costo-eficientes y adaptados y participación ciudadana (OECD, Open Government in Latin America, 2014). Los datos abiertos pueden también fomentar el acceso efectivo y universal a políticas sociales al brindar información durante todas las etapas de prestación del servicio y empoderar a los usuarios. La Ciudad de México tiene un portal de transparencia específico para los beneficios y las políticas sociales, con el objetivo de posibilitar una mejor gestión de recursos y una distribución más equitativa de los programas sociales entre los grupos más

³ OECD et al. 2019 >>

vulnerables (Agencia Digital de Inovacion Publica, 2019). De manera similar, ante del COVID-19, Chile puso en marcha el portal [bonocovid](#), en el que los ciudadanos pueden verificar directamente su estatus y elegibilidad para pagos de apoyo por la crisis.⁴

La consulta pública por lo común se utiliza en la etapa de definición y elaboración del ciclo de política en América Latina. Es preciso que los gobiernos se cercioren que este proceso no resulte debilitado en el mediano plazo por la necesidad de responder rápidamente a la evolución de la crisis sanitaria.

La consulta pública se acepta como un medio valioso de mejorar la calidad de la política pública y al mismo tiempo reforzar su legitimidad (OECD, 2016). En toda la región, los países incluyeron disposiciones legales para promover mecanismos de consulta en la formulación de políticas y en todos los niveles de gobierno, y en general, todos los países de la región han adoptado algunas medidas para integrar mecanismos de consulta en sus procesos de elaboración de regulaciones y presupuestos (OECD, Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020, 2020).

Chile (OECD, Chile Scan Report on the Citizen Participation in the Constitutional Process, 2017) y México llevaron a cabo grandes procesos de consulta para promover la inclusión y la representación en sus procesos de redacción de la Constitución. La consulta de partes interesadas en Colombia para los acuerdos de prosperidad se orientó a fortalecer la cohesión social a nivel local y acelerar el desarrollo regional desde una perspectiva sectorial (OECD, Open Government in Latin America, 2014). La consulta directa puede utilizarse como una herramienta de inclusión social y puede aprovechar los métodos habilitados en línea y también los métodos presenciales tradicionales para impulsar un desarrollo social más incluyente. Los mecanismos de consulta pueden propiciar la inclusión y la representación de poblaciones marginadas en países de la región, como el mecanismo de consulta institucional para poblaciones indígenas de Costa Rica (OECD, Open Government in Argentina, 2019).

En Costa Rica las autoridades trabajan ahora sobre la base de las directrices que toman en cuenta el marco de práctica médica y las tradiciones de las comunidades indígenas para establecer “grupos de trabajo” que incluyen a proveedores de servicios de salud indígenas y no indígenas, con el fin de sensibilizar y construir capacidad para hacer frente al COVID-19 en dichas comunidades.⁵ En términos más amplios, experiencias como las del Acuerdo Nacional de Perú también demuestran cómo un foro consultivo establecido para promover el diálogo entre las autoridades gubernamentales y la sociedad civil, con el propósito de facilitar la implementación de las políticas de Estado,⁶ puede aprovecharse para centrar los esfuerzos en gestionar la pandemia. Mediante este mecanismo se emitieron diversas medidas y recomendaciones para guiar la respuesta del país a los retos actuales de atención médica y económicos planteados por el COVID-19,⁷ incluida la necesidad de trabajar con el sector informal de Perú para cumplir con medidas como el uso de mascarillas, por ejemplo.

Están surgiendo en América Latina y el Caribe prácticas de participación activa, creando maneras innovadoras de atender los complejos retos de la política pública

La participación es una relación basada en una sociedad entre ciudadanos y gobiernos. Reconoce condiciones de igualdad para los ciudadanos en el ciclo de política (aunque la toma de decisiones final a menudo recae en el gobierno). El uso del presupuesto participativo (PP) en países de la región establece un debate incluyente, participativo y realista sobre las opciones presupuestarias (OECD, 2016). El PP empezó hace más de dos décadas en Porto Alegre, Brasil y es un proceso mediante el cual los ciudadanos presentan sus demandas y prioridades respecto al gasto público. El PP es una herramienta para desarrollar confianza y cohesión social al ejecutar políticas y prestar servicios para el bienestar de toda la población. Por ejemplo, los municipios brasileños que adoptaron el PP

⁴ Bono COVID, Chile >>

⁵ Ministerio de Salud de Costa Rica >>

⁶ Acuerdo Nacional, Perú >>

⁷ Acuerdo Nacional, Perú >>

registraron una baja importante en mortalidad infantil y un aumento de 20% a 30% en inversión pública en servicios de saneamiento y salud (OGP, 2018), y los PP de Sao Paulo fomentaron la inclusión social e importantes efectos redistributivos en contextos urbanos para grupos marginados (residentes pobres, mujeres y jóvenes) (Hernandez, 2010).

Catching the Deliberative Wave: Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions (junio 2020), un informe de la OCDE de pronta publicación (2020), se centra en el uso de procesos deliberativos representativos por instituciones públicas y reconoce que los países están implementando esta manera innovadora de reforzar la confianza y resolver los retos de política pública. La deliberación en *cabildos* (consejos locales o reuniones de ayuntamientos) es una antigua tradición en los países latinoamericanos y en fecha más reciente, Colombia puso en marcha un experimento ad hoc con ex integrantes de organizaciones guerrilleras para estudiar la deliberación en una situación posterior al conflicto. Los investigadores concluyeron que la deliberación puede ser clave en situaciones posconflicto, ya que facilita el diálogo, la comprensión y la reconciliación (Ugarriza & Caluwaerts, 2015).

La participación de los actores puede ayudar a los países de la región a enfrentar la informalidad y la exclusión, así como apoyar la toma de decisiones incluyente en el sitio de trabajo.

El diálogo social puede considerarse un tipo de participación de los actores, pues se refiere a la idea de que el gobierno reúne a grupos focalizados en un foro —en este caso empleados, empleadores y representantes del gobierno— para informar e influir en la toma de decisiones. El diálogo social tiene como objetivo principal el de promover la participación democrática entre los principales actores del mundo laboral y tiene el potencial de resolver importantes dilemas económicos y sociales, alentar la buena gobernanza, promover la paz y la estabilidad sociales e industriales e impulsar el progreso económico (ILO, Social Dialogue, n.d). En Costa Rica, el Consejo Superior del Trabajo es un órgano consultivo permanente formado por representantes del gobierno y organizaciones de empleadores y trabajadores, cuyo mandato es contribuir a la consolidación de un sistema democrático de relaciones laborales basadas en el trabajo digno y en el diálogo social permanente (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, n.d).⁸ En El Salvador, el Consejo Nacional del Salario Mínimo es un foro tripartita permanente, consagrado en la Constitución, que fija el salario mínimo en el país (Ministerio de Trabajo y Prevision Social, s.d.).⁹

Con una tasa de empleo informal que representa el 58% de los trabajadores,¹⁰ la informalidad constituye un gran reto para los países de la región (ILO, Women and men in the informal economy: A statistical picture, 2018). Por definición, la economía informal es difícil de medir y comprender, de modo que, al diseñar y poner en marcha políticas dirigidas al sector informal, los gobiernos deberán prestar atención especial a incluir las voces de los trabajadores informales. El uso de mecanismos participativos focalizados, como las consultas, puede ayudar a integrar a los beneficiarios en el ciclo de política para promover decisiones basadas en evidencias y cumplimiento. En muchos países los trabajadores informales son esenciales para la prestación de servicios y tradicionalmente la informalidad ha participado en la mitigación del impacto de la falta de oportunidades de empleo formal en la subsistencia en toda la región. En este sentido, los trabajadores informales enfrentan riesgos importantes por el COVID-19 y las restricciones y crisis económicas relacionadas. Los gobiernos tendrán que trabajar para garantizar esto y se incluye a otros grupos vulnerables (véase la Sesión 2) como parte del diálogo social más amplio y del proceso de formulación de políticas, con el fin de apoyar la aceptación de las medidas COVID-19 y facilitar a la vez una recuperación más incluyente y social.

⁸ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica >>

⁹ Ministerio de Trabajo y Previsión Social, El Salvador >>

¹⁰ OECD/ILO, 2019 >>

Más allá de la crisis por COVID-19, la participación ciudadana puede apoyar a los países de ALC a afrontar temas apremiantes como el avanzar hacia una agenda de desarrollo sostenible, combatir la corrupción y promover sociedades incluyentes.

Más allá del COVID-19, cabe señalar que los países de la región ya utilizaban políticas de gobierno abierto para implementar efectivamente la agenda de desarrollo sostenible, combatir la desigualdad, mejorar el bienestar humano y fomentar la cohesión social (Open Government Partnership, 2015). La confianza en el gobierno, la buena gobernanza y servicios públicos eficientes y equitativos son resultado de las reformas de gobierno abierto (OECD, 2016).

La OCDE ha recopilado evidencia para sustentar que la implementación de políticas de gobierno abierto sostiene la transición hacia una relación entre ciudadanos y gobierno basada en la confianza y políticas y servicios más eficientes y equitativos. La confianza en el gobierno es esencial para la cohesión social y el bienestar, ya que afecta la capacidad del gobierno de implementar reformas (OECD, Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020, 2020). Si el gobierno abierto puede contribuir a combatir la exclusión al otorgar poder a todas las voces, puede crear una sensación de pertenencia mediante la formulación de políticas abierta y fomentar la confianza mediante la puesta en práctica de sus principios, entonces el gobierno abierto puede impulsar la cohesión social en la recuperación del COVID-19 y más allá.

La inclusión y la participación son un tema apremiante y son sumamente relevantes hoy en América Latina. La protección del espacio cívico es un requisito fundamental para las reformas de gobierno abierto y la participación efectiva. Tendencias recientes muestran que en algunos países, las voces de grupos como las poblaciones indígenas, la población LGBT o los periodistas y activistas son acalladas.¹¹ Se corre además el riesgo de que en el contexto de la crisis actual, sin una supervisión y rendición de cuentas adecuadas, las restricciones temporales impuestas en toda la región a algunos derechos y libertades cívicos pueden perjudicar a largo plazo la cohesión social.¹²

La participación de ciudadanos y actores en la formulación de políticas públicas puede apoyar una nueva relación entre los gobiernos y los ciudadanos basada en la confianza y en un nuevo pacto social basado en la igualdad y la cohesión social. Sin embargo, para que la participación de ciudadanos y actores cumpla con lo prometido, las autoridades públicas tendrán que tomar medidas serias y hacer los esfuerzos necesarios para incluir y escuchar a tantas voces como sea posible, en especial las de aquellos a quienes por lo general se les considera socialmente excluidos.

La OCDE identificó las siguientes opciones de políticas públicas para consideración por parte de los formuladores de política (OECD 2020; OECD, 2016; OECD, 2015; OECD, 2011; OECD, 2001):

- Establecer estrategias de gobierno abierto exhaustivas y fomentar la cooperación entre el gobierno y los poderes del Estado para aumentar la institucionalización, la inclusión y el impacto de las prácticas de gobierno abierto. Disposición 10 de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre gobierno abierto alienta a los países a pasar a un enfoque de Estado abierto, que incluya a todos los poderes del Estado y a los gobiernos locales en la promoción de los principios de gobierno abierto.
- Construir un marco propicio claro (disposiciones legales, arquitectura institucional, mecanismos de coordinación e instituciones supervisoras) para sustentar la definición, coordinación e implementación de las políticas de gobierno abierto. Es recomendable que los países la región se centren en impulsar la participación de grupos subrepresentados, como los trabajadores informales, las mujeres, las poblaciones indígenas, la población LGBT, los jóvenes, los migrantes, etc. (véase la Sesión 2).

¹¹ Civicus Monitor >>

¹² OECD, 2020 >>

- Proporcionar los recursos adecuados para la implementación (construcción de competencias y capacidades, recursos financieros y humanos) a servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Los países de la región deberían invertir en construir capacidades cívicas y en formación para grupos subrepresentados, con el fin de crear igualdad de condiciones de participación en la sociedad.
- Crear oportunidades para que ciudadanos y actores participen en todas las etapas del ciclo de política, con diferentes instrumentos de política y en todos los niveles de gobierno. Para que la participación construya confianza y cohesión social, tiene que convertirse en una práctica y una cultura dentro y fuera del gobierno. A medida que trabajen para afrontar los efectos de la pandemia, los países podrán beneficiarse de la participación de ciudadanos y actores en áreas de política apremiantes como la violencia de género y la discriminación, las políticas fiscales y redistributivas y los servicios públicos esenciales.
- Facilitar el desarrollo de herramientas para intensificar la comunicación de políticas de gobierno abierto, como guías, folletos y materiales visuales para integrar los beneficios del gobierno abierto en la sociedad en su conjunto.
- Utilizar indicadores y mecanismos de evaluación e integrar mecanismos participativos como una manera de fomentar el cambio medible y evitar una situación de “lavado abierto” en la que el gobierno abierto se utilice como una “pantalla de humo” para una gobernanza opaca.
- Utilizar y dar más impacto a mecanismos participativos existentes, como los consejos tripartitas u órganos consultivos, y fortalecer el diálogo social para comprender mejor la informalidad e integrar las voces de este grupo subrepresentado en el proceso de toma de decisiones para afrontar sus retos de manera adecuada.

Preguntas para debate:

- *¿Cómo han involucrado los países de la región a los actores en la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que enfrentamos ahora?*
- *¿De qué manera es la crisis por COVID-19 una oportunidad para reconstruir la relación entre los gobiernos y los ciudadanos y convertirla en una relación basada en la confianza?*
- *Desde una perspectiva a mediano plazo, ¿qué podrían los países de la región implementar prácticamente para integrar mejor las voces marginadas en la formulación de políticas públicas? ¿Cómo puede la OCDE seguir apoyando a la región a impulsar un proceso de formulación de políticas incluyente?*
- *Más allá del COVID-19 y lo aprendido de la crisis, ¿cómo puede el gobierno abierto apoyar a los países de la región a afrontar problemas apremiantes como la corrupción, la desigualdad y el descontento social?*

Material de referencia adicional de la OCDE:

- OECD (2020), *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing. [20], [34]
- OECD (2019), *Open Government in Argentina*, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/1988ccef-en>. [23]

- OECD (2018), *Facilitating social dialogue under the OECD Guidelines for Multinational Enterprise*, <https://mneguidelines.oecd.org/facilitating-social-dialogue-under-the-OECD-Guidelines-for-MNEs.pdf>.
- OECD (2017), *Chile Scan Report on the Citizen Participation in the Constitutional Process*. [21]
- OECD (2017), "Recommendation of the Council on Open Government", *OECD Legal Instruments*. OECD/LEGAL/0438, pp. 1-10. [4]
- OECD (2016), *Best Practice Principles for Stakeholder Engagement in Regulatory Policy*.
- OECD (2016), *Open Government: The Global Context and the Way Forward*, OECD Publishing, París, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en>. [6], [8], [19], [24], [33]
- OECD (2015), *Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life*, <http://www.oecd.org/governance/2015-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-public-life->
- OECD (2014), *Open Government in Latin America*, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264223639-en>. [9], [13], [15], [17], [22]
- OECD (2011), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>.
- OECD (2011), *Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World*, https://doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2012-en. [2], [7] [11]
- OECD (2011), *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264116573-en>.
- OECD (2009), *Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services*, OECD Publishing. [1], [12]
- OECD (2001), *Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making*, OECD Publishing, París, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264195578-en>. [5]
- OECD (n.d), Social Cohesion, <https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/social-cohesion.htm> (consultado el 6 de abril de 2020). [3]

Material de referencia adicional de los miembros del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (LACRP) y otros:

- Agencia Digital de Innovación Pública (2019), *Sistema de Información para el Bienestar de la Ciudad ganador del premio Gobernarte 2019 del BID*, <https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sistema-de-informacion-para-el-bienestar-de-la-ciudad-ganador-del-premio-gobernarte-2019-del-bid>. [18]
- Congreso de la Nación Argentina (n.d), "Portal de Leyes Abiertas" [Open Legislation Portal], <https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/info?section=acerca-de> (consultado el 3 de abril de 2020).
- Hernandez, E. (2010), "Social Inclusion through Participation: the Case of the Participatory Budget in São Paulo", *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 34.3, pp. 512-32, <http://dx.doi.org/DOI:10.1111/j.1468-2427.2010.00966>. [26]

- Hernando de Soto (2020), *Un plan para aprovechar El COVID-19 como oportunidad para que los países en desarrollo acumulen capital en vez de deuda*, https://www.dropbox.com/s/lj1cis9wqhdfxrp/OECD_DeSoto_Doc1_Spanish_20
- International Labour Organisation (n.d), *Social Dialogue*, <https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm%20%20a> (consultado el 1 de abril de 2020). [28]
- International Labour Organisation (2018), *Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third edition*, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm [31]
- Macmillan, P. (ed.) (2015), *Democratic Deliberation In Deeply Divided Societies : From Conflict To Common Ground*. [27]
- OGP (2018), *The Skeptic's Guide to Open Government*. [25]
- Open Government Partnership (2015), *How Can the Open Government Partnership Accelerate Implementation of the 2030 Agenda*, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/04/OGP_SDGs_ReportV3_OnlineVersion.pdf (consultado el 6 de abril de 2020). [32]
- Ramirez-Alujas, A. y N. Dassen (2016), "Winds of change II: progress and challenges in open government policy in Latin America and the Caribbean", *Inter-American Development Bank Technical Note*, <https://publications.iadb.org/en/winds-change-ii-progress-and-challenges-open-government-policy-latin-america-and-caribbean>. [10]
- Richards, D. (2002), *Governance and Public Policy in the UK*, Oxford University Press.
- UNESCO (n.d), *Freedom of Information in Latin America and the Caribbean*, <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/foi-in-latin-america-and-the-caribbean/>. [14]
- United Nations (2019), *Sustainable Development Goal 16*, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16> (consultado el 6 de abril de 2020). [19]
- United Nations (n.d), *Information for Integrated Decision-Making and Participation*, <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/information-integrated-decision-making-and-participation>. [16]
- World Justice Project (2019), *Rule of Law Index*, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf.